

**PROCEDIMIENTO:** Tutela

**MATERIAS:** Vulneración de derechos fundamentales

**DEMANDANTE:** JOHN EXEQUIEL POLANCO ESPINOZA

**DEMANDADO:** DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE

**RIT:** T-61-2022

**RUC:** 22-4-0406983-0

-----/

Chillán, uno de diciembre de dos mil veintitrés.

**JOHN EXEQUIEL POLANCO ESPINOZA**, chileno, casado, Administrador de Seguridad Pública, cédula nacional de identidad 11.438.633-2, domiciliado en 3 Rio Segre N° 2283, Condominio Los Tajibos casa N°17, Comuna de Chillán, interponer denuncia de tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido, reconocimiento de la relación laboral, cobro de prestaciones e indemnizaciones en contra de la **DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE**, RUT 62.000.450-2, representada legalmente por su delegado don **CLAUDIO ANDRÉS FERRADA ALARCÓN** o quien lo subrogue legalmente en el cargo de conformidad al artículo 4 de Código del Trabajo, ambos domiciliados para éstos efectos en Edificios Públicos Avenida Libertador S/N, Comuna de Chillán, en contra del **SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA** representado legalmente por su Subsecretario don **MANUEL ZACARÍAS MONSALVE BENAVIDES** o quien lo subrogue legalmente en el cargo de conformidad al artículo 4 de Código del Trabajo, ambos domiciliados para éstos efectos en Palacio de la Moneda S/N, Comuna de Santiago, y en contra del **FISCO DE CHILE** representado por la Procuradora Fiscal **MARIELLA DENTONE SALGADO** o quien la subrogue legalmente domiciliados en 18 de septiembre N°329, Comuna de Chillán, de conformidad al artículo 4 de Código del Trabajo.

El día 10 de marzo de 2021 comenzó su trabajo para el Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y Seguridad para desempeñar labores en la Intendencia Regional de Ñuble (actual Delegación Presidencial Regional de Ñuble), lo que se materializó mediante Convenio a Honorarios a Suma Alzada de fecha 10 de marzo de 2021. Dicha designación tendría en principio una duración limitada hasta el 31 de diciembre del mismo año. Desde esa fecha, el vínculo fue sido renovado en una oportunidad, extendiendo su duración al 31 de diciembre de 2022, conforme a los contratos que se acompañan en este acto.

A pesar de la denominación de “honorarios”, sostiene que se trata de una relación laboral en consideración a lo siguiente:

Cumplía con un horario de trabajo determinado, bajo una jornada laboral de 44 horas semanales, subordinada a las directrices de parte de sus superiores.



Su contrato establecía, vacaciones, días administrativos, licencias, licencias médicas, post natal parental, permiso parental por nacimiento, permiso por fallecimiento de familiar directo, permiso por matrimonio, viáticos por traslado y otros beneficios de tipo eminentemente laboral.

En cuanto al cese de los servicios, expone que el día Lunes 28 de Marzo de 2022, a las 12:30 horas, fue llamado a la oficina de despacho del delegado presidencial de Nuble, don Claudio Ferrada Alarcón, quien en presencia del nuevo Jefe de Departamento de Finanzas de la Región de Nuble, don Gabriel Pradenas Sandoval y la jefe de gabinete y asesor jurídico, me informaron verbalmente en ese momento que quedaba desvinculado, a partir del 1 de abril de 2022, por razones políticas, situación que en el intertanto le señaló que solamente esperaría la formalidad del acto administrativo.

Su función radicaba fundamentalmente como supervisor de televigilancia móvil con dron, desde la central que funcionaba en las mismas instalaciones de la delegación presidencial, a lo cual mantenía a nueve personas a cargo y ejecutaba las coordinaciones necesarias para el funcionamiento del equipo de televigilancia con dron para los servicios a desarrollar en la región de Ñuble, en el contacto directo con las policías, Instituciones u organizaciones sociales, siempre en el marco de la prevención y seguridad, por las razones que obedecen a su trayectoria como Coronel de Carabineros en situación de retiro, administrador de seguridad y licenciado en ciencias policiales, contando con experiencia por más de 31 años de servicios, acogándose a retiro en la Prefectura de Carabineros Ñuble a fines del año 2020. Su función estaba dada de acuerdo con el perfil del cargo y su selección fue a través de una entrevista Sico laboral desde la Subsecretaría de Prevención del Delito en el mes de febrero del año 2021.

En la actualidad a partir del 11 de Marzo de 2022, ejerce el cargo de Consejero Regional provincia de Diguillín en la Región de Ñuble y su inscripción fue en el Pacto de Chile Vamos Independiente por UDI, situación que en la práctica fue determinante para el argumento político que en éste caso el delegado presidencial resolvió, sin que se le mencionara esto último, pero a mayor abundamiento está la tesis de su desvinculación por razones políticas.

En síntesis, los aspectos más relevantes de la relación laboral, son los siguientes: a. Inicio de la relación: 10 de mayo de 2021 b. Funciones: Supervisor Proyecto de Televigilancia Móvil en la Región de Ñuble, en el marco del Plan Calle Segura. c. Jornada: 44 horas semanales con sujeción de horario. d. Remuneración: \$2.100.000. e. Término de la relación laboral: Término formal 1 de abril de 2022.

Las funciones iniciadas el día 1 de marzo de 2021, fueron prestadas dentro de la Intendencia de Ñuble (actual Delegación Presidencial Regional de Ñuble) del



Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito, según se detallan a continuación:

- “Supervisar el equipo de trabajo • Validar los turnos de trabajo • Revisar y/o validar la programación y coordinar con los municipios • Establecer y/o validar los informes semanales y mensuales • Revisar y proponer la facturación mensual • Validar la entrega de información ante un requerimiento • Coordinar en las salidas con Carabineros, Municipios o PDL y la empresa • Otras funciones que se le deleguen y que se enmarquen dentro de los fines establecidos en relación al Programa Actuará como supervisor de la ejecución de las tareas mencionadas en la cláusula precedente el Coordinador Regional de Seguridad Pública o quien realice las funciones que le correspondan”.

Las funciones que ha realizado durante sus contratos de honorarios, son propias del trabajo de la Intendencia de Ñuble y luego de la Delegación Presidencial Regional de Ñuble, es decir pertenecen a su rango esencial, en otras palabras, se realizaban antes de la contratación y continuarán una vez concluida ésta, lo que manifiestamente se contrapone al concepto de transitoriedad dado por la figura de “honorarios”.

En resumen, desarrollaba actividad de la misma manera y en las mismas condiciones que el resto de los funcionarios de la Intendencia de Ñuble y luego de la Delegación Presidencial Regional de Ñuble. En base a lo señalado, y analizando el conjunto de los antecedentes fácticos que se allegan y teniendo en cuenta el principio protector de primacía de la realidad, queda de manifiesto de que efectivamente en el caso de autos concurren los presupuestos del artículo 7 del Código del Trabajo, para calificar la prestación de servicios que hizo el actor como una de carácter laboral, más allá de lo expresado en los documentos que suscriben las partes.

Explica que las situaciones de hostigamiento que lo afectan y pretenden privarlo de su cargo, cuya propiedad le pertenece al menos hasta el 31 de diciembre de 2022, la han afectado en el plano económico, psicológico y profesional, vetándome de ejercer el puesto para el que me he preparado durante su excelente carrera funcionaria. No cabe duda de que su estabilidad psicológica y psíquica, desde la fecha de la ya mencionada reunión, ha sido gravemente afectada, dado que no tiene mayor conocimiento de su futuro, pese a poseer una contratación legalmente efectuada hasta fines de este año.

#### **Declaraciones:**

1.- Que se declare que la denunciada, con ocasión del despido ha vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 N 1, inciso primero de la CPR,



esto es, “el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de la persona”, como asimismo la del artículo 19 N 4 de la CPR “Derecho a la honra o dignidad”, el principio de no discriminación contenido en el artículo 2 del Código del Trabajo y ha incurrido en acoso laboral, regulado en el artículo 2 inciso 2 del Código del Trabajo o lo que S.S estime en derecho y justicia.

2.- Que conforme lo dispuesto en el artículo 489 del Código del Trabajo condene a la denunciada a la Indemnización adicional, en su máximo rango, esto es 11 meses de la última remuneración mensual, por la suma de \$23.100.000.

3.- Que, se condene a la demandada al pago del lucro cesante equivalente a los meses restantes del contrato estipulado bajo el termino inicial, equivalente a \$18.900.000 o lo que S.S estime en derecho y justicia

4.- Que se reconozca una relación laboral entre las partes regida por el Código del Trabajo, condenando a las siguientes indemnizaciones

a. Que, conforme al artículo 163 del código el trabajo, se le condene a la demanda a pagar la indemnización por años de servicio, correspondiente a la suma de \$2.100.000 o lo que S.S determine en justicia y derecho

b. Que, se le condene a la demanda a dar pago a la indemnización sustitutiva de aviso previo por \$2.100.000 o lo que S.S determine en justicia y derecho.

c. Incremento legal del 50% de la indemnización por años de servicios, según lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo por no haber invocado el empleador causal legal, por la suma de \$1.050.000.-, o aquella cantidad mayor o menor que resulte de acuerdo al mérito del proceso;

d. Pago de vacaciones pendientes por la suma de \$1.050.000.

e. Pago de sueldos de abril a diciembre de 2022 por la suma de \$18.900.000

f. Pago de las cotizaciones previsionales y de salud no enteradas.

**CONTESTACIÓN:** El Consejo de Defensa del Estado se opone a la demanda; en síntesis, sostiene que tanto la denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, como la demanda por despido injustificado deducida subsidiariamente, deberán ser rechazadas al ser interpuestas defectuosamente. En efecto, la demanda y su posterior rectificación, fue dirigida en forma conjunta en contra de la Delegación Presidencial Regional de Ñuble, del Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en contra del Fisco de Chile, en circunstancias que sólo este último cuenta con personalidad jurídica y capacidad procesal para actuar en autos. Al ser dirigida de esta forma, deberán rechazarse ambas acciones, por estar mal enderezada y además planteadas en términos indeterminados.



Respecto del fondo, arguye que entre la parte demandante y el Fisco de Chile existió una relación de prestación de servicios a honorarios, no verificándose en caso alguno una vinculación contractual de índole laboral. Cabe hacer presente que el actor fue contratado en el contexto de la implementación de un Convenio de transferencia de recursos, suscrito con fecha 4 de diciembre de 2020 entre la Intendencia Regional de Ñuble –actual Delegación Presidencial Regional de Ñuble– y la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el objeto de implementar el proyecto de televigilancia móvil en la Región de Ñuble, en el marco del plan calle segura. En efecto, los servicios prestados por el demandante detentan la naturaleza jurídica de “cometidos específicos”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, tal como se evidencia del propio relato del actor y de los dos contratos de prestación de servicios que suscribió. Por consiguiente, en caso alguno ha existido un vínculo contractual de índole laboral.

Por otro lado, afirma que la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios del actor en caso alguno ha supuesto una vulneración de los derechos fundamentales del mismo, ni tampoco un despido injustificado, obedeciendo exclusivamente a lo establecido en su cláusula tercera, la que indica expresamente que cualquiera de las partes podrá poner término anticipado al Convenio cuando lo estime conveniente, sin necesidad de expresión de causa. Por lo expuesto, la terminación del contrato, en caso alguno ha configurado una discriminación debido a razones políticas, ni implica acto alguno que constituya maltrato y/o acoso laboral. A la vez, y, en consonancia con lo expuesto, el término anticipado del contrato no pudo, en caso alguno, vulnerar ninguno de aquellos derechos fundamentales invocados.

En el improbable caso que se acoja la demanda en aquella parte que solicita se declare la existencia de la relación laboral, alega que el Fisco de Chile no estaba en posición de pagar las cotizaciones previsionales y de salud que según el actor no han sido enteradas, ni tampoco escriturar un contrato de trabajo conforme a la normativa laboral, puesto que, en virtud del principio de legalidad competencial y presupuestaria, la Administración no puede destinar dineros al pago de cotizaciones si así no lo ha autorizado la respectiva ley de presupuesto, como tampoco puede escriturar un acto o contrato para el cual no tiene autorización, u otorgar beneficios legales propiamente laborales en circunstancias que la Administración está vedada para contratar bajo dicha modalidad. A mayor abundamiento, los convenios a honorarios suscritos por el demandante han nacido al amparo de actos administrativos que gozaban de presunción de legalidad, según lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Carta



Fundamental y el artículo 3 inciso final de la Ley 19.880. A su vez, en ambos contratos de prestación de servicios suscritos por el demandante, se estableció la obligación de este último en lo relativo al pago de sus cotizaciones de seguridad social, de conformidad la ley vigente.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Hechos no discutidos:

1.- Que entre las partes suscribieron dos contratos de prestación de servicios a honorarios que comenzó el día 10 de marzo de 2021 y terminó el día 01 de abril de 2022.

2.- Al término de la relación la suma pagada por los servicios era la suma de \$2.100.000 pesos.

**SEGUNDO: Controversia:**

Respecto a la acción de Tutela:

1.- Existencia de indicios suficientes de haberse producido vulneración de las garantías denunciadas por el actor. En la afirmativa, hechos que la constituyen.

2.- Para el caso de acreditarse los indicios, efectividad que la conducta de la denunciada habría estado fundado en circunstancias objetivas distintas a las alegadas por el actor. Hechos y circunstancias.

3.- Efectividad de ser procedente el lucro cesante. En la afirmativa, monto del mismo. Respecto a la acción subsidiaria

1.- Efectividad que el actor prestó servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia laboral. En la afirmativa, hechos y circunstancias.

2.- Funciones que desempeñaba el actor.

3.- Efectividad que la demandada adeuda cotizaciones previsionales en favor del actor en los organismos pertinentes. En la afirmativa, periodos y montos adeudados.

4.- Efectividad que se adeudan las prestaciones reclamadas en la demanda que corresponden a sueldos de abril a diciembre de 2022 y vacaciones pendientes. En la afirmativa, monto del mismo.

**TERCERO:** Prueba rendida por la demandante:

1) Convenio a honorarios a suma alzada servicio de gobierno interior-cuenta complementaria de fecha 1.01.2022 (acompañado con la demanda).

2) Carta de la Delegación Presidencial de Nuble dando término del convenio a honorarios de fecha 29.03.2022, a partir del 1.04.2022 (acompañado con la demanda).

3) Certificado de competencias desde la Subsecretaría de Prevención del delito de fecha 30.04.2022 (acompañado con la demanda).



4) Convenio de transferencia de recursos del convenio suscrito por la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Intendencia de la región de Ñuble de fecha 23.04.2021 (acompañado con la demanda).

5.- Convenio de transferencia de recursos del convenio suscrito por la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Delegación Presidencial de Ñuble, de fecha 21 de febrero de 2022.

6.- Modificación del convenio de recursos suscrito por la Subsecretaria de Prevención del Delito y la Delegación Presidencial de Ñuble para la operatividad del proyecto de televigilancia móvil de en marco de la ejecución del plan “calle segura”, de fecha 07 de febrero de 2022.

7.- Certificado de disponibilidad presupuestaria 24 de enero de 2022.

8.- Convenio a Honorarios a suma alzada de servicio de gobierno interior-cuenta complementaria. (Contrato vigente John Polanco Espinoza, a partir del 10 de marzo de 2022).

9.- Planilla entrevista psicólogo resultado recomendable a favor John Polanco Espinoza.

10.- Perfiles del cargo de Supervisor de Televigilancia móvil de la Subsecretaría de Prevención del delito de fecha 02 de febrero de 2021.

11.- Informes de trabajo en cumplimiento a las funciones asociales y funciones ejecutadas por el Supervisor John Polanco Espinoza desde Marzo 2021 a Octubre 2021.

12.- Presentación esquematizada de Televigilancia de la Subsecretaria de Prevención del Delito, con funciones claramente definidas.

13.- Certificado de Asunción de Consejeros Regionales de la Región de la Región de Ñuble.

14.- Boleta de Honorarios correspondiente al mes de marzo del año 2022.

15.- Información sobre el programa de Televigilancia. 16.- Curriculum Vitae de don John Polanco Espinoza.

17.- Certificado de Afiliación de AFP de don John Polanco Espinoza.

18.- Certificado de Pensión de Retiro emitido por la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) de don John Polanco Espinoza.

**TESTIMONIAL:**

1.- David Hans Hube Garcés, Ingeniero Comercial

2.- Judith Andrea Baeriswyl Bustamante.

**Oficios:**

1.- Que se oficie a AFP PLANVITAL, con domicilio en Arauco 405 Local 2, Comuna de Chillán, correos electrónicos [oficios.poderjudicial@planvital.cl](mailto:oficios.poderjudicial@planvital.cl) y [infocital@planvital.cl](mailto:infocital@planvital.cl), a fin de que remita certificado de cotizaciones desde mayo





de 2021, hasta abril de 2022, correspondiente al demandante John Exequiel Polanco Espinoza cédula de identidad n° 11.438.633-2. (Se incorpora)

2.- Que se oficie a AFC, domiciliada en Avenida Libertad 421, Comuna de Chillan, correo electrónico [oficios\\_juzgados@afc.cl](mailto:oficios_juzgados@afc.cl), a fin de que remita certificado de cotizaciones desde mayo de 2021, hasta abril de 2022, correspondiente al demandante John Exequiel Polanco Espinoza cédula de identidad n° 11.438.633-2. (Se incorpora)

3.- A DIPRECA, con domiciliado en 21 Mayo N°592, Comuna de Santiago, Hall primer piso, correos electrónicos [dipreca@dipreca.cl](mailto:dipreca@dipreca.cl) y [mafuentes@dipreca.cl](mailto:mafuentes@dipreca.cl), a fin de que remita certificado de cotizaciones desde mayo de 2021, hasta abril de 2022, correspondiente al demandante John Exequiel Polanco Espinoza cédula de identidad n° 11.438.633-2. (Se incorpora)

#### EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS:

1.- Copia de los registros de las entradas y salidas del demandante entre mayo de 2021 a abril de 2022. (Se exhibe y se tiene por cumplido)

2.- Informes y boletas de honorarios emitidos por el demandante a la demandadas entre mayo de 2021 a abril de 2022. (Se exhibe y se tiene por cumplido)

3.- Curriculum vitae y los certificados de título del demandado. (Se exhibe sólo curriculum y se tiene por cumplido)

#### CUARTO: Prueba de la demandada:

1.- Resol. Ex. N° 1709, de 17 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que aprueba Convenio de transferencia de recursos con la Intendencia de la Región de Ñuble, para implementar el Proyecto de Televigilancia Móvil, en el marco del Plan Calle Segura, incluyendo las especificaciones técnicas referenciales para la contratación de arriendo de drones y el informe elaborado para la suscripción del Convenio.

2.- Resol. Ex. N° 343, de 23 de abril de 2021, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que modifica convenio de transferencias citado en el numeral anterior.

3.- Resol. Ex. 235, de 21 de febrero de 2022, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que modifica convenio de transferencias citado en el numeral 1, incluyendo certificado de disponibilidad presupuestaria y memorándum con los antecedentes justificativos de la modificación de convenio suscrita.

4.- Resol. Exenta RA N° 245/4281/2021, de 21 de diciembre de 2021, del Servicio de Gobierno Interior, que aprobó el convenio a honorarios a suma alzada suscrito con el demandante y denunciante, a contar del 10 de marzo y hasta el 31





de diciembre de 2021, con certificado de imputación y disponibilidad presupuestaria.

5.- Resolución Exenta RA N° 61, de 9 de febrero de 2022, de la Delegación Presidencial Regional de Ñuble, que aprobó diversos convenios a honorarios a suma alzada por el año 2022 en el contexto del proyecto de televigilancia móvil en la Región de Ñuble, en el marco de la ejecución del Plan Calle Segura, incluyendo el convenio de honorarios del demandante y denunciante, con certificado de imputación y disponibilidad presupuestaria.

6.- Certificado de antecedentes educacionales del demandante y denunciante, emitido con fecha 29 de enero de 2021 por el Director de la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile.

7.- Registro de asistencia suscrito por el demandante y denunciante durante todo el período de duración de los convenios de honorarios suscritos.

8.- Perfil del cargo de televigilancia móvil para el cual fue contratado el actor, fechado el 2 de febrero de 2021.

9.- Carta suscrita por Encargada del Departamento de Administración y Finanzas, de la Delegación Presidencial Regional de Ñuble de 29 de marzo de 2022, que comunica término anticipado del convenio suscrito con el demandante y denunciante.

10.- Oficio N° 01055, de 24 de agosto de 2022, de la Sra. Gobernadora Regional (S) de Ñuble, a la Abogada Procurador Fiscal de Chillán del Consejo de Defensa del Estado, remitiendo una serie de antecedentes relacionados con la asunción y desempeño del denunciante y demandante don Jhon Exequiel Polanco Espinoza, en el cargo de Consejero Regional de Ñuble, en el mes de marzo de 2022.

11.- Certificado N° 409/2022 del Consejo Regional de Ñuble, que señala fecha en la cual asumen los nuevos Consejeros Regionales para el período 11 de marzo 2022 a 6 de enero 2025, entre los cuales se encuentra el denunciante y demandante, adjunto al Oficio N° 01055, de 24 de agosto de 2022, de la Sra. Gobernadora Regional (S) de Ñuble, ya citado.

12.- Certificado N° 410/2022 del Consejo Regional de Ñuble, que da cuenta del acuerdo adoptado respecto de las Presidencias y Vicepresidencias de las Comisiones del órgano colegiado del que forma parte, entre los cuales se encuentra la designación del denunciante y demandante como Presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Seguridad, adjunto al Oficio N° 01055, de 24 de agosto de 2022, de la Sra. Gobernadora Regional (S) de Ñuble, ya citado.

13.- Acta de Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Ñuble N° 87, de fecha 19 de abril de 2022, en cuya página 28 se comienza a dar cuenta del



Informe de la Comisión de Gobierno y Relaciones Institucionales N° 08, adoptada en sesión de fecha 22 de marzo de 2022, que contó con la presencia y votaciones del demandante y denunciante, y en que desde las páginas 31 a 34 se establece la integración de las diversas Comisiones del Consejo Regional, entre los cuales se encuentra el denunciante y demandante como Presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Seguridad y como integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de la Comisión de Salud y Medio Ambiente, de la Comisión de Fiscalización, así como de la Comisión de Gobierno y Relaciones Institucionales, adjunto al Oficio N° 01055, de 24 de agosto de 2022, de la Sra. Gobernadora Regional (S) de Ñuble, ya citado.

14.- Certificado N° 414/2022 del Consejo Regional de Ñuble, que acredita la asistencia de los Consejeros Regionales a las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas en el mes de marzo de 2022 a las que asistió el denunciante y demandante, adjunto al Oficio N° 01055, de 24 de agosto de 2022, de la Sra. Gobernadora Regional (S) de Ñuble, ya citado.

15.- Ordinario N° 045/2022, de fecha 8 de marzo de 2021, del Presidente del Consejo Regional de Ñuble, que cita a sesión extraordinaria del Consejo Regional de Ñuble para el 11 de marzo de 2022, en primera y segunda citación, dirigida entre otras personas al denunciante y demandante, adjunto al Oficio N° 01055, de 24 de agosto de 2022, de la Sra. Gobernadora Regional (S) de Ñuble, ya citado.

16.- Ordinario N° 055/2022, de fecha 22 de marzo de 2022, del Presidente del Consejo Regional de Ñuble, que cita a sesión ordinaria del Consejo Regional de Ñuble para el 30 de marzo de 2022, dirigida entre otras personas al denunciante y demandante, adjunto al Oficio N° 01055, de 24 de agosto de 2022, de la Sra. Gobernadora Regional (S) de Ñuble, ya citado.

17.- Certificado N° 415/2022 del Consejo Regional de Ñuble, que acredita la asistencia de los Consejeros Regionales a las sesiones de las diversas sesiones de las Comisiones del Consejo Regional de Ñuble, realizadas en el mes de marzo de 2022 y a las que asistió el denunciante y demandante, adjunto al Oficio N° 01055, de 24 de agosto de 2022, de la Sra. Gobernadora Regional (S) de Ñuble, ya citado.

**CONFESIONAL:** Absolvió posiciones el demandante don Jhon Exequiel Polanco Espinoza.

**Testigos:** 1.- Silvana Alarcón del Pino y Juan Irribarra Troncoso.

**QUINTO:** Vulneración de derechos fundamentales:

La sola declaración de la testigo doña Judith Baeriswyl, quien manifestó que el Delegado Presidencial les señaló que tenía que ser desvinculado por razones



políticas, resulta insuficiente para establecer indicios de discriminación política, en el cese de servicios del demandante. Fuera de dicho testimonio, la prueba restante no contiene antecedentes que corroboren y precisen la descripción efectuada por la testigo referida. En estas circunstancias, dicho testimonio no puede servir de base para establecer indicios suficientes para revelar un propósito discriminatorio, en los términos planteados en la denuncia.

**SEXTO:** En lo que toca a la integridad psíquica del denunciante, no hay prueba suficiente que contenga antecedentes médicos relativos a una afectación de esta naturaleza. Se hace presente que no hay antecedentes acerca de alguna enfermedad sufrida por el demandante que sea reactiva a su situación laboral, lo que descarta la vulneración alegada.

**SÉPTIMO:** La libertad de trabajo y su protección está principalmente referida al derecho para buscar y desempeñar cualquiera actividad remunerativa, por consiguiente, se aplica directamente al origen de la relación laboral y no respecto del contenido propio y concreto del contrato de trabajo, que está sujeto al mandato de la ley en la medida que es la vía a través de la cual se establecen las obligaciones para el empleador y los derechos del trabajador. La propuesta contenida en la denuncia no está planteada con la precisión necesaria para ligarla a la libertad para desempeñarse en cualquier actividad lícita como garantiza la Carta Fundamental, de manera que la acción de tutela por esta materia debe ser igualmente rechazada.

**OCTAVO:** Vínculo laboral:

El actor comenzó a prestar servicios para la Intendencia Regional de Ñuble, El día 10 de marzo de 2021, en virtud de un Convenio a Honorarios a Suma Alzada. Según el contrato debía realizar labores consistentes en:

Los servicios contratados eran de supervisor y en dicha calidad el contrata establece las siguientes obligaciones que debía cumplir el actor:

- “Supervisar el equipo de trabajo
- Validar los turnos de trabajo
- Revisar y/o validar la programación y coordinar con los municipios
- Establecer y/o validar los informes semanales y mensuales
- Revisar y proponer la facturación mensual
- Validar la entrega de información ante un requerimiento
- Coordinar en las salidas con Carabineros, Municipios o PDL y la empresa
- Otras funciones que se le deleguen y que se enmarquen dentro de los fines establecidos en relación al Programa Actuará como supervisor de la ejecución de las tareas mencionadas en la cláusula precedente el Coordinador Regional de Seguridad Pública o quien realice las funciones que le correspondan”.



Se establece que el Coordinador Regional de Seguridad Pública, actuará como supervisor de las tareas mencionadas.

En el segundo convenio celebrado por el actor con la Delegación Presidencial de Ñuble, con fecha 1 de enero de 2022, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, contempla funciones similares al anterior y actúa también como supervisor, el Coordinador Regional de Seguridad Pública.

Ambos convenios contienen beneficios, tales como:

15 días hábiles por año calendario para suspender la prestación de servicios y continuar percibiendo honorarios.

Dos días para trámites personales con derecho a honorarios.

Desde tres días en proporción a la duración del contrato.

Derecho a licencia médica, Pre Natal y Post Natal, licencias médicas por enfermedad grave del hijo(a) menor de un año.

Derecho a una hora diaria para alimentar a los hijos menores de dos años.

Otros beneficios como, descanso parental por nacimiento, descanso por fallecimiento de familiar directo y descanso por matrimonio.

Los servicios debían prestarse en la Delegación Presidencial de Ñuble y en las comunas de la Región.

**NOVENO:** De la prueba testimonial rendida por la demandante, se desprende que el demandante debía cumplir horario, que era controlado mediante la firma de un registro, hecho que está ligado con lo pactado en la cláusula quinta de los convenios suscritos por el actor, que establecen que debía cumplir una jornada semanal de 44 horas, según el horario vigente para prestar servicios y además, debía firmar un registro de ingreso y salida a las dependencias en que cumplía las obligaciones del convenio respectivo.

**DÉCIMO:** El artículo 7° del Código del Trabajo dispone: "Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, este a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada".

El artículo 8° inciso 1° del texto citado indica: "Toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior, hace presumir la existencia í de un contrato de trabajo". En cuanto al artículo 5° inciso 2° del Código del Trabajo, este señala: "Los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo".

En la especie, teniendo en cuenta los hechos probados señalados en los fundamentos precedentes, surge de los mismos, el carácter laboral del vínculo contractual que unía al actor con la demandada en estos autos. En efecto, se logró



acreditar que el actor prestaba servicios, que cumplía una jornada laboral, cumplía las instrucciones que se le entregaban, que debía entregar un informe mensual de las labores realizadas a su jefatura directa, y que percibía una remuneración de carácter mensual. De la constatación de estos indicios de laboralidad, se infiere la existencia de una relación contractual de carácter laboral, cuestión que además, importa la irrenunciabilidad de los derechos laborales.

Se ha estimado por la Excma. Corte Suprema, que aquellas contrataciones a honorarios que exceden los márgenes dispuestos en los respectivos estatutos administrativos, configuran en definitiva una relación regida por el Código del Trabajo. Es lo que ocurre en este caso concreto en que se dan los presupuestos propios de un vínculo laboral, de manera que incluirlo en un estatuto especial como pretende la demandada, contradice su propia esencia laboral.

**UNDÉCIMO:** En base a los contratos de prestación de servicios, es posible fijar los límites temporales del vínculo laboral entre las partes en cuanto a su inicio y término en los días 10 de marzo de 2021 y el 31 de marzo de 2022, respectivamente.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Al no resultar aplicable lo prevenido el estatuto especial pretendido por la demandada y calificado como contrato de trabajo del vínculo entre las partes, ello importa la sujeción del término de los servicios a las causales precisas y determinadas del Código Laboral. Como la demandada no se ajustó a las fórmulas legales de dicho cuerpo normativo desde el inicio de la relación con el actor, tampoco demostró la justificación de su término en base a alguna de las causales que el mismo código contempla, por lo tanto, se concluye que el demandante fue desvinculado sin causa legal y deberá ser condenada a las indemnizaciones reclamadas en la demanda, en la forma que se indicará.

**DÉCIMO TERCERO:** La sanción por no pago de cotizaciones previsionales no se aplica respecto de los entes públicos. Ello deriva del hecho de haberse establecido el vínculo con el trabajador, al amparo de un estatuto legal específico, que le otorga una presunción de legalidad. Además, como señala la Excma Corte Suprema, "(...) se ha considerado que la aplicación –en estos casos– de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido. ([Rol N°12.294-20](#)).



**DÉCIMO CUARTO:** Según la cláusula décima de los convenios celebrados por el denunciante, “es de exclusiva responsabilidad y cargo del prestador de servicios pagar las cotizaciones previsionales para pensiones, accidentes del trabajo y enfermedad profesionales y de salud en conformidad a las normas legales vigentes”.

Por lo tanto, la demandada solo deberá enterar las cotizaciones del seguro de cesantía que no están comprendidas en la cláusula contractual durante el periodo trabajado señalado en el considerando undécimo, respecto del porcentaje de cargo del empleador.

**DÉCIMO QUINTO:** El término anticipado y carente de justificación legal del contrato con fecha 1 de abril de 2023, otorga al trabajador el derecho de percibir las remuneraciones pendientes de pago hasta la fecha de cese pactada, es decir, el 31 de diciembre de 2023.

**DÉCIMO SEXTO:** El empleador deberá pagar además lo adeudado por concepto de feriado, según lo dispuesto en el artículo 73 del Código del Trabajo.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** La Delegación Presidencial Regional de Ñuble y el Servicio de Gobierno Interior, no carecen de legitimidad pasiva, pues se trata de organismos estatales que gozan de capacidad procesal en razón de la imputabilidad legal y directa de sus potestades públicas, sin que para ser parte en juicio necesiten personalidad jurídica plena o patrimonio propio.” Por estos motivos, se concluye por que no existen elementos para acoger una excepción opuesta, que se basa en que la demanda se encuentra mal planteada, lo que lleva al rechazo de la excepción.

**DÉCIMO OCTAVO:** El resto de los medios de prueba carece de antecedentes que contradigan las conclusiones del tribunal sobre la controversia.

Por estas consideraciones y, visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8 y 425 y siguientes y 459 del Código del Trabajo, se declara que:

**I.- Se acoge** la demanda presentada por **John Exequiel Polanco Espinoza** en contra de la **Delegación Presidencial de la Región de Ñuble y Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública**, representados por el **Fisco de Chile** y se declara que entre las partes existió un contrato de trabajo desde el 10 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2022, que terminó por despido injustificado.

**II.-** Como consecuencia de lo anterior, la demandada deberá pagar al actor las siguientes prestaciones:

a.- La suma de **\$2.100.000.-**, por concepto de indemnización por años de servicios, conforme al artículo 163 del Código del Trabajo;



b.- La suma de \$ **2.100.000.-**, por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo;

c.- Incremento legal del 50% de la indemnización por años de servicios, según lo dispuesto en el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo por no haber invocado el empleador causal legal, por la suma de \$**1.050.000.-**

d.- La suma de \$**18.900.000.-** por concepto de lucro cesante, equivalente a la remuneración que dejó de percibir desde la fecha del despido, el 1 de abril de 2022 y el término del contrato de trabajo, esto es, el 31 de diciembre de 2022.

e.- Vacaciones pendientes por la suma de \$**2.100.000.-**;

f.- Que se deberán pagar las cotizaciones por seguro de cesantía por todo el período trabajado, debiendo oficiarse a la entidad pertinente conforme a lo dispuesto en el artículo 461 del Código del Trabajo.

**III.-** Las sumas ordenadas pagar, deberán pagar deberán serlo con los reajustes e intereses que establecen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

**IV.-** Se rechaza en lo demás la demanda.

**V.-** Cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

**RIT: T-61-2022**

**RUC: 22-4-0406983-0**

**Dictada por Juez(a) Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán.**





